



CFCP - Sala I  
CPE 1409/2008/T01/12/CFC2  
"HARGOUAS, Horacio Martín  
s/ recurso de casación".

## *Cámara Federal de Casación Penal*

**Registro nro.: 860/22**

///nos Aires, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil veintidos, integrada la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces doctores Diego G. Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal -CFCP-, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en el presente legajo nro. **CPE 1409/2008/T01/12/CFC2**, del registro de esta Sala I, caratulado: "**HARGOUAS, Horacio Martín s/recurso de casación**", del que **RESULTA**:

1º) Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 1, en fecha 7 de junio de 2021, resolvió: "**I. RECHAZAR la suspensión de juicio a prueba solicitada por Horacio Martín HARGOUAS y su defensa (art. 76 bis del C.P.). II. DECLARAR inoficioso el tratamiento del ofrecimiento realizado por el nombrado en el punto anterior**". (Destacados presentes en el original).

2º) Que, contra esa decisión, el defensor particular de Horacio Hargouas interpuso recurso de casación, el que fue concedido por el tribunal *a quo*.

3º) La defensa fundó su presentación en los términos de ambos incisos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y manifestó que la decisión del tribunal es arbitraria.



Luego de recordar los antecedentes del caso, sostuvo en primer lugar que la decisión en crisis resulta arbitraria por haber omitido el Tribunal evaluar los presupuestos legales contenidos en el art. 76 bis del Código Penal, para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba.

En primer lugar, en lo que hace a la posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba a su asistido, afirmó que se ha omitido valorar la relativa levedad del hecho y a las condiciones personales del imputado, así como el plazo transcurrido de casi dieciséis (16) años desde la supuesta ocurrencia del hecho. Manifestó que se informó *"...la ausencia de antecedentes penales del peticionante y la inexistencia de otra causa penal abierta en su contra. Asimismo, se hizo saber que ejerce su profesión de Contador Público Nacional, que resulta ser sostén indispensable de la familia plenamente constituida de la que forma parte, la cual se encuentra integrada por su señora esposa y por su dos hijos Lucas y Matías, este último con padecimiento de visión subnormal de ambos ojos, con afecciones degenerativas de globo ocular, lo que determinara la expedición a su respecto de un certificado de discapacidad en los términos de la ley 22.431 de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, se acreditó con la documental correspondiente que en virtud de un matrimonio anterior, mi asistido resulta ser padre de María Elena, quien por padecer síndrome de down, también registra certificado de discapacidad en los términos de la citada ley provincial"*.

Por otra parte, se agravio por considerar que la sentencia recurrida sustentó sus argumentos en un dictamen que no cumple con el requisito de la razonabilidad jurídica. Afirmó que para la oposición fiscal se valoró un

---

Fecha de firma: 04/08/2022

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35410381#335252449#20220715101714323



## *Cámara Federal de Casación Penal*

rol preponderante de Hargouas dentro de la asociación que no es tal, conforme el requerimiento de elevación a juicio. Además, se quejó pues la Sra. Fiscal adujo que la concesión de la *probation* a su asistido no serviría para "desgongestionar el sistema" en tanto el juicio oral debería realizarse para los restantes imputados. Sobre este punto, manifestó que *"...desde la ocurrencia de los hechos han transcurrido a la fecha casi dieciséis (16) años, razón por la cual, contrariamente a lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal, el instituto denegado sería la mejor solución y la más ajustada a derecho, para que [su] defendido pueda encontrar una definitiva solución del conflicto, dando termino a la angustia e incertidumbre que en él impera, por la dilatada tramitación del expediente"*.

Por último destacó que el Tribunal *"...motivó deficientemente, a través de argumentaciones aparentes, la decisión judicial que rechazó la suspensión del juicio a prueba, adoptando un criterio contra homine (...) circunstancia expresamente sancionada con pena de nulidad, por tratarse de un mandato legal que surge de la esencia republicana de los actos de gobierno"*.

Finalmente hizo expresa reserva del caso federal.

4º) Que en la oportunidad prevista por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN, las partes no hicieron presentaciones.

5º) Que superada la etapa prevista en el art. 465, último párrafo y en el 468 del CPPN, oportunidad en la que el letrado apoderado de la querellante AFIP-DGI presentó breves notas y petitionó que se confirme la



decisión recurrida, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Ana María Figueroa, Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña.

**La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:**

**1º)** Previo a ingresar al análisis de los agravios planteados por el recurrente, cabe recordar que Horacio Martín Hargouas fue procesado por considerarlo *“prima facie”* coautor (en calidad de miembro) del delito previsto y reprimido por el art. 210 del Código Penal, primer supuesto, en orden al hecho descripto por la consideración 1º del presente (cfr. arts. 45 y 210 del Código Penal y arts. 306, 310 y 312 del C.P.P.N., este último *a contrario sensu*).

Concretamente, surge del procesamiento que *“...el objeto procesal de las presentes actuaciones se encuentra circunscripto a la presunta existencia de una organización, integrada cuanto menos por Pedro Rodolfo ALIANO, Marcelo Rodolfo ALIANO, Fernando Darío ALIANO, Horacio Martín HARGOUAS, Claudia Elena LORO, Rubén Néstor BAGATTIN y Pablo Oscar AGOSTINELLI, que habría tenido actividad por lo menos desde los años 1998 a 2005, en principio hasta el 14/10/2005 dedicada a cometer una indeterminada cantidad de delitos, en principio tipificados por la Ley 24.769, entre otros. Ello, mediante la creación de personas jurídicas presuntamente ficticias (“usinas” generadoras de comprobantes sin actividad real) para comercializar comprobantes que serían apócrifos y así justificar la compra de bienes y servicios con el objeto de que los adquirentes (“usuarios”) generasen costos o créditos fiscales ficticios y, de esa manera, redujesen*

---

Fecha de firma: 04/08/2022

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35410381#335252449#20220715101714323



## *Cámara Federal de Casación Penal*

*indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago se encontraban obligados.*

*Las "usinas" antes referidas contarían con una existencia en el plano formal, no obstante lo cual no tendrían una actividad real comprobada. Las mismas serían, en principio, las siguientes: RAY MAN S.A.; GOUDGE S.A.; PLUTARCO CONSTRUCCIONES S.A.; SHEPPERTON S.A.; ORION PLUS S.A.; LEONTIEV S.A.; PLANETA CONSULTORA S.A.; DROVEL S.A.; QUINET S.A.; CONSULTORA DRAYER S.A.; EPEO S.A.; NORLINT S.A.; DAYLANSUR S.A.; BENDGAL S.A.; LAUSEY S.A.; PROLAN S.A.; HUATULCO S.A. y PLETHON S.A" (las mayúsculas obran en el original).*

**2º)** Ahora bien, de las constancias de las presentes actuaciones, surge que la defensa de Horacio Martín Hargouas, solicitó la suspensión del proceso a prueba.

En oportunidad de celebrarse la audiencia en los términos del art. 293 del código de rito, la querella se opuso a la solicitud de la defensa, en razón de que existe pluralidad de imputados en la causa y que, al no poder acceder todos los imputados al beneficio se torna desaconsejable, porque de todas maneras hay que celebrar el debate oral. Además, recordó que la querella requirió la elevación a juicio respecto del imputado por la calificación del art. 15 inc. `c` de la ley 24.769, cuyo mínimo impide considerar que, de existir pena, la misma sería en suspenso. Por último, afirmó que "*...que el art 76 bis C.P. indica que no puede prosperar el beneficio cuando hay pena de inhabilitación y el art. 20 bis inc. 3 del*



*C.P. contempla la posibilidad de imponer pena de inhabilitación para los casos de abuso del ejercicio de una profesión toda vez que en esta causa hay contadores, considera otro motivo para que no prospere el beneficio...".*

Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la solicitud en cuestión. Basó su negativa en la resolución PGN 97/2009, que instruye a los fiscales a valorar -además de las pautas del art. 76 bis- otros criterios de política criminal. Afirmó que coincide con la querella en cuanto a que es necesario tener en cuenta la pluralidad de intervinientes en los hechos y que en el caso, *"...es un criterio de política criminal la debilitación de ir a juicio sin la imputación de HARGOUAS, tal como viene requerida la elevación a juicio, es necesario tener en cuenta la pluralidad de intervinientes en los hechos, para poder probar en juicio la organización, que tal como viene la acusación fundada se le atribuye una conducta a HARGOUAS que es fundamental para la prueba de la Fiscalía, manejo de gestiones contables e impositivas y su aporte a la organización está en el núcleo mismo, que esto es necesario para la Fiscalía para abastecer y fundar la acusación respecto también del resto de los imputados, que claramente ir a juicio sin contar con la posibilidad de juzgar y valorar la conducta del imputado, debilitaría la acusación de la Fiscalía, porque tampoco se cumplía con la condición de la ley porque el juicio se llevaría a cabo igualmente, no están en condiciones de prestar consentimiento"* (las mayúsculas obran en el original). Sobre este punto, afirmó que el delito de asociación ilícita por el que se imputa al encartado requiere mancomunidad: la existencia de número mínimo de personas y el poder acreditar el rol que cada uno tuvo para demostrar el funcionamiento y existencia de la

---

Fecha de firma: 08/08/2022

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZA DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: WALTER DANIEL MAGNONE, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: DANIEL ANTONIO PETRONE, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL

Firmado por: DIEGO GUSTAVO BARROETAVEÑA, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL



#35410381#335252449#20220715101714323



## *Cámara Federal de Casación Penal*

asociación ilícita. En el caso, afirmó que no se puede prescindir del aporte de Hargouas, que no es un aporte marginal pues como contador manejaba la cuestión contable e impositiva, situación que en el juicio no se podría debatir si no se encuentra imputado. Finalmente, sostuvo que *"no es el momento procesal oportuno, que esta prognosis es la que se le puede exigir a la Fiscalía. Asimismo, refirió que el principio de oportunidad está vinculado objetivamente a conductas de escasa lesividad y dañosidad y no es el caso que se le imputa a Hargouas y que debería producir el juicio"*.

En último término, se le concedió la palabra a la defensa, la cual indicó que la oposición -de la querella y de la fiscalía- es de fundamentos aparentes en tanto se basó en una alusión genérica para rechazar el pedido, esto es, la pluralidad de imputados. Ello, en tanto afirmó que *"hay gente con responsabilidades distintas en la causa, que hay jefe de organización, los organizadores que no pueden solicitar la Suspensión del juicio a prueba, pero Hargouas sí puede"*

Sumado a ello, consideró que *"[e]n relación a lo expuesto por la Sra. Fiscal, que lo dictaminado no puede pasar el examen de legalidad que debe efectuar el Tribunal, el dictamen es arbitrario por adolecer de fundamentación aparente, en cuanto a que la ausencia de Hargouas debilitaría la acusación de la Fiscalía, que no dijo cómo, que solo habló de pluralidad de imputados, que no dijo cómo perjudicaría la ausencia de Hargouas el juicio. Lo cierto es que ni la Querella ni la Fiscalía"*



*pudieron atacar las condiciones objetivas y concretar que dijo la Defensa y no refirieren ninguna circunstancia concreta de la causa que impediría en caso de condena, que se aplique una condena de ejecución condicional, que la Fiscalía reconoció que podría aplicarse en suspenso, pero igualmente hay que ir a juicio, que es inadmisibles la oposición y reitera se resuelva de conformidad".*

Fijado cuanto antecede, el a quo resolvió, no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por Horacio Martín Hargouas. Contra esa decisión, la defensa interpuso el recurso que ahora nos ocupa.

3º) Ahora bien, llegado el momento de resolver, adelanto mi voto en el sentido de rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Horacio Martín Hargouas, pues entiendo que el recurrente no controvierte los fundamentos del decisorio por medio de una crítica concreta y razonada, y tampoco demuestra que la solución adoptada en el caso contenga deficiencias lógicas de razonamiento, fundamentación o apartamiento normativo de las reglas aplicables que impidan considerar que se está en presencia de una decisión jurisdiccional válida, aspectos que no alcanza a acreditar.

En efecto, analizada la resolución recurrida y los fundamentos de la presentación casatoria de la defensa de Horacio Martín Hargouas, se advierte que tampoco el recurrente ha intentado refutar los argumentos de la Fiscal relativos a la necesidad de la presencia de todos los imputados en la causa en la realización del debate, en virtud de la naturaleza del delito que se les imputa.

Tampoco ha realizado una crítica específica respecto de los lineamientos generales de actuación, referidos al instituto de la suspensión del juicio a







## *Cámara Federal de Casación Penal*

prueba, que estableció el Procurador General de la nación por medio de la Resolución N°97/09 –Res. de fecha 14 de agosto de 2009- lineamientos a los que responde la oposición fiscal en el caso.

Tal posición del acusador público, cabe agregar, luce sustentada en razones de política criminal referidas al caso en concreto, en orden a la necesidad de contar con la totalidad de los imputados en el debate, de modo de ventilar los hechos investigados en juicio oral y público, que permita la dilucidación de la maniobra investigada, máxime cuando se trata de delitos complejos. Cabe recordar sobre el punto que se atribuye al recurrente formar parte de una asociación ilícita orientada a la creación de personas jurídicas presuntamente ficticias para comercializar comprobantes que serían apócrifos y así justificar la compra de bienes y servicios con el objeto de que los adquirentes generasen costos o créditos fiscales ficticios y, de esa manera, redujesen indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago se encontraban obligados.

4°) Se concluye que corresponde homologar el pronunciamiento puesto en crisis, por cuanto tampoco se advierten los motivos de arbitrariedad invocados por el recurrente que autoricen la habilitación de esta vía extraordinaria, habida cuenta que la decisión ha sido sustentada razonablemente y los agravios introducidos en el remedio casatorio intentado sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta en la anterior instancia (Fallos: 302:284; 304:415, entre otros).



Ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de arbitrariedad de sentencias, que dicha doctrina reviste carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para examinar su procedencia pues, sostener lo contrario importaría abrir una tercera instancia ordinaria, en aquellos supuestos en que las partes estimen equivocadas las decisiones de los jueces que suscriben el fallo (Fallos: 285:618; 290:95; 291:572; 304:267 y 308:2406).

5°) A lo expuesto, cabe adunar que la resolución recurrida cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido (Fallos: 293:294; 299:226; 303:449; 303:888, entre otros).

En conclusión, no se observa violación al deber de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales ni a las normas sustantivas que regulan el instituto de la suspensión del juicio a prueba así como tampoco se verifica supuesto alguno de arbitrariedad, sino más bien una disconformidad con los fundamentos del pronunciamiento recurrido.

Además, lo resuelto por el tribunal resulta acorde con la posición mayoritaria de la doctrina en torno a la improcedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba, cuando media oposición fiscal fundada en cuestiones de política criminal referidas al caso y el tribunal ha efectuado de ella el debido control de logicidad y fundamentación en su decisorio (cfr. D'ALBORA, Francisco; Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado; Abeledo Perrot; Buenos Aires; 2009; p. 502).

En razón de todo lo expuesto, concluyo que los agravios introducidos por la recurrente no logran conmovier





## *Cámara Federal de Casación Penal*

lo sustentado por el tribunal a quo, ni demuestran vicios de fundamentación aparente en el dictamen fiscal ni en el pronunciamiento impugnado.

Tal es mi voto.

**El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:**

**I.** Que, habiendo sido reseñados por la colega preopinante los antecedentes de la presente causa, a los cuales me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias, habré de postular el rechazo del recurso de casación de la defensa.

Ello así teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso traído a estudio y toda vez que el recurso de casación en análisis reúne las exigencias previstas por el artículo 463 del CPPN.

**II.** Que, tal como se reseñara en el sufragio que me antecede, en el caso traído a estudio, en la oportunidad prevista por el art. 293 del CPPN, la señora fiscal entendió que correspondía el rechazo de la solicitud de suspensión del juicio a prueba debido a que *"...en función de la resolución PGN 97/2009, que instruye a los fiscales a valorar -además de las pautas del art. 76 bis- otros criterios de política criminal... (se) deben analizar en el caso si la concesión de la Suspensión del Juicio a Prueba cumple con los objetivos o debilitaría la acusación al momento del debate que va a tener que llevarse a cabo en la presente causa, donde hay imputados que no pueden acceder al beneficio, entonces no se cumpliría con uno de los fines del instituto que es descongestionar el sistema,*



y que es para delitos de escasa trascendencia y levedad, que no es el caso”.

Continuó argumentando que “la escala penal, según la Jurisprudencia refiere que la posibilidad de acceder a la condena de ejecución condicional es un obstáculo de por sí, pero no todos los casos automáticamente habilitan al acceso al instituto en cuestión. Que es un criterio de política criminal la debilitación de ir a juicio sin la imputación de HARGOUAS, tal como viene requerida la elevación a juicio, es necesario tener en cuenta la pluralidad de intervinientes en los hechos, para poder probar en juicio la organización, que tal como viene la acusación fundada se le atribuye una conducta a HARGOUAS que es fundamental para la prueba de la Fiscalía, manejo de gestiones contables e impositivas y su aporte a la organización está en el núcleo mismo, que esto es necesario para la Fiscalía para abastecer y fundar la acusación respecto también del resto de los imputados, que claramente ir a juicio sin contar con la posibilidad de juzgar y valorar la conducta del imputado, debilitaría la acusación de la Fiscalía, porque tampoco se cumplía con la condición de la ley porque el juicio se llevaría a cabo igualmente, no están en condiciones de prestar consentimiento”.

Entendió que “...el consentimiento de la Fiscalía es un requisito indispensable, sin este consentimiento el Tribunal no puede decidir si concede o no el beneficio. A todo evento, la falta de consentimiento del Ministerio Público Fiscal que está fundado vincula al Tribunal, que si el Tribunal considera que no está fundado debería requerir otro dictamen, para el caso que el Tribunal no comparta la opinión de la Fiscalía. A su entender, la fundamentación cumple con el art. 69 CPPN, y además se da





## *Cámara Federal de Casación Penal*

*cumplimiento a la resolución PGN 97/2009, por lo que se opone a la suspensión de juicio a prueba, con las reservas de casación y recurso extraordinario federal...".*

*Posteriormente, frente a la réplica de la defensa, la Fiscal agregó que "...no es el momento para que la Fiscalía adelante el criterio que sostendría al momento de ir a juicio, que necesita una prognosis del por qué se debilitaría la acusación al momento de ir a juicio sin contar con Hargouas. Aclaró que solo adhirió a la negativa de la Querella, no a todos los argumentos, ya que hay diferente calificación, que respecto de la pena de inhabilitación la Fiscalía tiene una posición distinta a la Querella".*

*Expresó que "aun en términos del art. 210 del C.P., el delito de asociación ilícita requiere mancomunidad, existencia de número mínimo de personas y poder acreditar el rol que cada uno tuvo para demostrar el funcionamiento y existencia de la asociación ilícita, que no se puede prescindir del aporte de Hargouas, que no es un aporte marginal, que HARGOUAS como contador manejaba la cuestión contable e impositiva, que en el juicio no se podría debatir si no se encuentra imputado Hargouas, que esta es la única prognosis del tratamiento de la cuestión, que no es el momento procesal oportuno, que esta prognosis es la que se le puede exigir a la Fiscalía. Asimismo, refirió que el principio de oportunidad está vinculado objetivamente a conductas de escasa lesividad y dañosidad y no es el caso que se le imputa a Hargouas y que debería producir el juicio".*



*"Que adhirió a la resolución de instrucción de carácter general y obligatoria para los fiscales y entronca la potestad del Ministerio Público Fiscal de fijar la potestad de cuestiones de policría criminal, que dio razones suficientes para decir por qué este caso debe ir a juicio y valorarse la intervención de Hargouas. En relación a la condena de ejecución condicional la Jurisprudencia (reg. 151/2008 de la CNCC, fallo "VAZQUEZ") sostuvo que es poder de discreción de la Fiscalía qué caso va a llevar a juicio o no, prescindiendo de que la pena pueda ser en suspenso, que algunos casos merecen un debate..."*

En base a esa oposición de la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y por las razones reseñadas en el voto que antecede, el Tribunal Oral en lo Penal Económico n°1 rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada por Horacio Martín Hargouas.

**III.** Sentado ello, corresponde rememorar que, con relación a la suspensión del juicio a prueba, prevista por el art. 76 bis del CP, tiene dicho la doctrina que "(...) es una medida alternativa de resolución de conflictos cuyo objetivo subyacente consiste en evitar la estigmatización del imputado, buscando además simplificar el tratamiento de algunos asuntos penales como consecuencia de la imposibilidad práctica del sistema para abarcar todos los casos que existen. En esa misma línea, se resaltó que la probation persigue lograr mayor eficiencia en el sistema penal, a través del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos...".

*"No obstante, varios autores han hecho hincapié en que la finalidad del instituto también tiene un sentido preventivo especial, en tanto pretende posibilitar la resocialización del imputado... evitar las consecuencias*





## *Cámara Federal de Casación Penal*

*estigmatizantes de la condena..." (Código Penal de la Nación -Comentado y Anotado-; Andrés D'Alessio y Mauro Divito; 2da edición actualizada y ampliada; Tomo I, páginas 1089/1115).*

Dicho ello, y en lo que aquí interesa, la referida norma expresamente establece, entre otros requisitos, que "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio".

De esa manera, uno de los requisitos para que el tribunal oral pueda suspender el juicio oral y público resulta ser el consentimiento del representante del MPF, siendo que en el caso de manifestar oposición debe necesariamente fundar su opinión, la que posteriormente será sometida al control de fundamentación y lógica de la jurisdicción.

Así, el consentimiento aludido es fruto de la vinculación de este instituto con el principio procesal de oportunidad, en tanto mandan aquí los criterios de política criminal que hacen a la oportunidad de mantener la persecución penal, los cuales se encuentran exclusivamente bajo potestad del titular de la acción pública y no de quien ejerce la jurisdicción que, como se dijo, solamente está habilitado para examinar la razonabilidad de lo dictaminado.

Asimismo, cabe señalar que el nexo del instituto de la *probation* con el principio procesal de oportunidad justifica que el acusador dictamine sobre la viabilidad de



la petición del imputado haciendo énfasis en motivos no estipulados de conveniencia y oportunidad político criminales que justifican que el conflicto sea resuelto en un juicio oral.

Ahora bien, la mera alegación de estos últimos motivos por parte del MPF no permite que el dictamen pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco es óbice, como se indicó, para que su postura quede sujeta a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad.

Nótese que, para un correcto ejercicio de la función del acusador, las mentadas razones deben tratar acerca de la conveniencia de la persecución penal con relación al caso concreto que se tiene a estudio y deben ser motivos que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomados en consideración para un pronunciamiento de ese tenor.

Es decir, la oposición por cuestiones de conveniencia y oportunidad política criminal, aplicadas al caso en concreto, debe contar con una debida explicación de por qué es útil que el suceso elevado a juicio sea sometido a debate oral; y siempre que no afecte el marco legal con el objeto de preservar el principio de legalidad.

En definitiva, en estos supuestos, teniendo en cuenta que la suspensión del proceso a prueba se trata de un instituto al cual el imputado tiene derecho a acceder en caso de reunir los demás requisitos que prevé la norma, la oposición de la fiscalía respaldada en "motivos de política criminal" no puede resultar arbitraria en desmedro de aquel derecho, pues tal como se dijo, deben brindarse debidos fundamentos que apoyen esa posición.

**IV.** Sobre esa base, corresponde analizar si lo plasmado en el dictamen de la señora fiscal abarcó razones que permitan considerarlo fundado y si el Tribunal *a quo*







## *Cámara Federal de Casación Penal*

efectuó el debido control de logicidad y fundó efectivamente su resolución.

En este sentido, de la lectura de los argumentos brindados por la acusadora pública se avizora de inicio que su oposición a la concesión de la *probation* al imputado Hargouas, luego de realizar un análisis concreto del hecho que se le enrostra, se basó en razones de oportunidad y conveniencia político criminal que consideró relevantes para someter el caso a juicio.

Al respecto, advierto que su dictamen, contrario a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, en modo alguno carece de fundamentación, circunstancia que lo tornaría arbitrario y consiguientemente, no vinculante para el tribunal al tiempo de tener que resolver acerca de la concesión del mentado beneficio.

Tal como se mencionó, la representante del MPF dio argumentos relacionados a razones de política criminal para dictaminar la improcedencia de la solicitud, los cuales se vincularon con la necesidad de que los hechos que se investigan en autos sean sometidos a debate por parte del tribunal a cargo de la causa.

En resumen, las razones fueron, entre otras que *"en caso de hacerse lugar a la suspensión del juicio a prueba requerida, ello inexorablemente traería aparejado el debilitamiento de la acusación con respecto a las restantes personas imputadas en la causa, quienes debían ser sometidas al debate oral y público..."* así como también que *"el hecho de no poder valorar en juicio el rol concreto que habría desempeñado HARGOUAS en la*



organización (que justamente habría sido el manejo de las gestiones contables e impositivas) dificultaría poder probar la existencia misma de la presunta asociación ilícita, por lo que consideró necesario que en el juicio oral también se lo juzgue a HARGOUAS por ese hecho...”.

En concreto, se basó en cuestiones de política criminal que “le permitieron concluir la inconveniencia de interrumpir la acción penal en el presente caso concreto, con respecto al imputado HARGOUAS”.

Entonces, de los argumentos reseñados se observa que previo a dictaminar sobre la concesión del instituto solicitado por el imputado, la señora fiscal se adentró en las características del caso particular realizando un juicio de conveniencia y oportunidad político criminal a los fines de evaluar la pertinencia del otorgamiento del mentado instituto. En consecuencia, entendió que esta clase de hechos requiere la realización del juicio a fin de lograr la solución del conflicto penal.

Bajo ese prisma, sostengo que en el *sub judice* la defensa de Hargouas se limitó a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal *a quo* consideró relevantes para denegar la petición efectuada.

Corresponde decir que tal como surge de la resolución traída a estudio, el *a quo* realizó el correspondiente y correcto control de razonabilidad y fundamentación exigido respecto del dictamen efectuado por el órgano acusador. Además, como adelanté, entiendo que de la opinión fiscal surgen los motivos que llevaron a concluir su oposición al beneficio postulado, basando la misma en las constancias de la causa y superándose así el control requerido en la especie.





## *Cámara Federal de Casación Penal*

De tal modo, los esfuerzos argumentativos efectuados por la defensa, fuera de manifestar su discrepancia con el resultado alcanzado, no han logrado demostrar cuáles serían los defectos de motivación del pronunciamiento, cuyos argumentos determinaron la resolución de manera que fuera controlable el *iter* lógico seguido para arribar a la conclusión.

En ese orden, no advierto quiebres o fisuras lógicas en el razonamiento desarrollado por el *a quo* que autoricen la tacha invalidante de la arbitrariedad, la que se encuentra debidamente fundada tanto en las constancias agregadas a la causa como en la normativa aplicable al caso.

Por último, sobre el particular es válido recordar que nuestro Máximo Tribunal, en materia de arbitrariedad de sentencias, ha dicho que esa doctrina reviste carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para examinar su procedencia pues, sostener lo contrario, importaría abrir una tercera instancia ordinaria en aquellos supuestos en que las partes estimen equivocadas las decisiones de los jueces que suscriben el fallo (Fallos: 285:618; 290:95; 291:572; 304:267 y 308:2406).

V. Por ello, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Horacio Martín Hargouas, con costas (arts. 456, 470, 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es mi voto.



**El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:**

Que adherimos a la solución propuesta en el voto que inaugura el acuerdo, que cuenta, además, con la anuencia del doctor Daniel Antonio Petrone.

Ello es así, toda vez que el tribunal oral interpretó que la oposición fiscal superaba el control de logicidad, fundamentación, legalidad y razonabilidad.

En tales términos, la falta de conformidad fiscal según lo establece el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal y, como lo consideró adecuadamente el tribunal *a quo*, resulta vinculante para el juzgador.

En consecuencia, consideramos que el tribunal de la instancia previa valoró las especiales circunstancias del proceso y analizó las fundadas razones que sustentaron la oposición fiscal, motivos que la parte recurrente no logró confrontar, manifestando sólo su disconformidad con respecto al criterio adoptado en la resolución puesta en crisis.

Con estas breves consideraciones, a fin de evitar caer en reiteraciones innecesarias, habida cuenta de todo lo expuesto, entendemos que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Horacio Martín Hargouas, con costas (arts. 456, 470 y 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

Es nuestro voto.-

Por ello, el Tribunal **RESUELVE:**

**I. RECHAZAR** el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Horacio Martín Hargouas, con costas (arts. 456, 470 y 471 *a contrario sensu*, 530 y 531 del CPPN).

**II. TENER PRESENTE** la reserva del caso federal.

Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la CSJN) y





CFCP - Sala I  
CPE 1409/2008/T01/12/CFC2  
"HARGOUAS, Horacio Martín  
s/ recurso de casación".

## *Cámara Federal de Casación Penal*

remítase al tribunal de origen mediante pase digital,  
sirviendo la presente de atenta nota de envío.

**Firmado:** Diego G. Barroetaveña, Daniel A. Petrone y Ana  
María Figueroa. Ante mí: Walter Daniel Magnone.

